

nes de vida de la población mexicana. La desnutrición es actualmente, la quinta causa de mortalidad infantil.

Por otra parte, el mantenimiento del nivel de la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva y especialmente el originado por cáncer del aparato reproductivo, es el más claro indicador de una incapacidad del sistema de salud de responder a una demanda que implica dedicar recursos públicos para disminuir su incidencia (los tumores malignos son la primera causa de muerte y entre éstos, el cáncer de cuello del útero y de mama son los más importantes, con una tasa de mortalidad que no ha mostrado cambios en años recientes).

Un tema que debe ser estudiado como parte de los efectos de las políticas de ajuste es la violencia y su relación con el incremento de las defunciones asociadas con ésta, ya que una proporción importante de estas muertes, tiene su origen en el incremento de acciones delictivas, que se convierten en una actividad que cada día mueve mayor número de recursos económicos y ofrece refugio a la población desplazada de la actividad productiva. Además, el debilitamiento del aparato estatal y la carencia de expectativas de movilidad social son factores asociados con ésta.

Los efectos del ajuste sobre la movilidad se manifiestan a través del incremento en el número de movimientos de los más pobres en busca de oportunidades de empleo, pero más importante aún es el incremento de flujos migratorios hacia los polos de desarrollo de la actividad económica dedicada a la producción para la exportación ya que su importancia crece con el ajuste estructural; a su vez, la caída del empleo y el incremento del diferencial salarial hacen que la migración hacia los Estados Unidos sea cada vez más y más significativa. A principios de los años ochenta el salario mínimo en México representaba el 15% del salario en aquel país, en 1997 llegó a ser sólo el 8% y la evolución de este diferencial se constata a través del salario en la manufactura.

A pesar de la dificultad de establecer relaciones causales entre economía y población, es posible suponer que la investigación sociodemográfica al mostrar el deterioro en las condiciones de vida de los mexicanos, puede evidenciar la necesidad de promover un modelo de desarrollo en el que el crecimiento económico no esté reñido con la equidad en la distribución de los beneficios. **Demos**

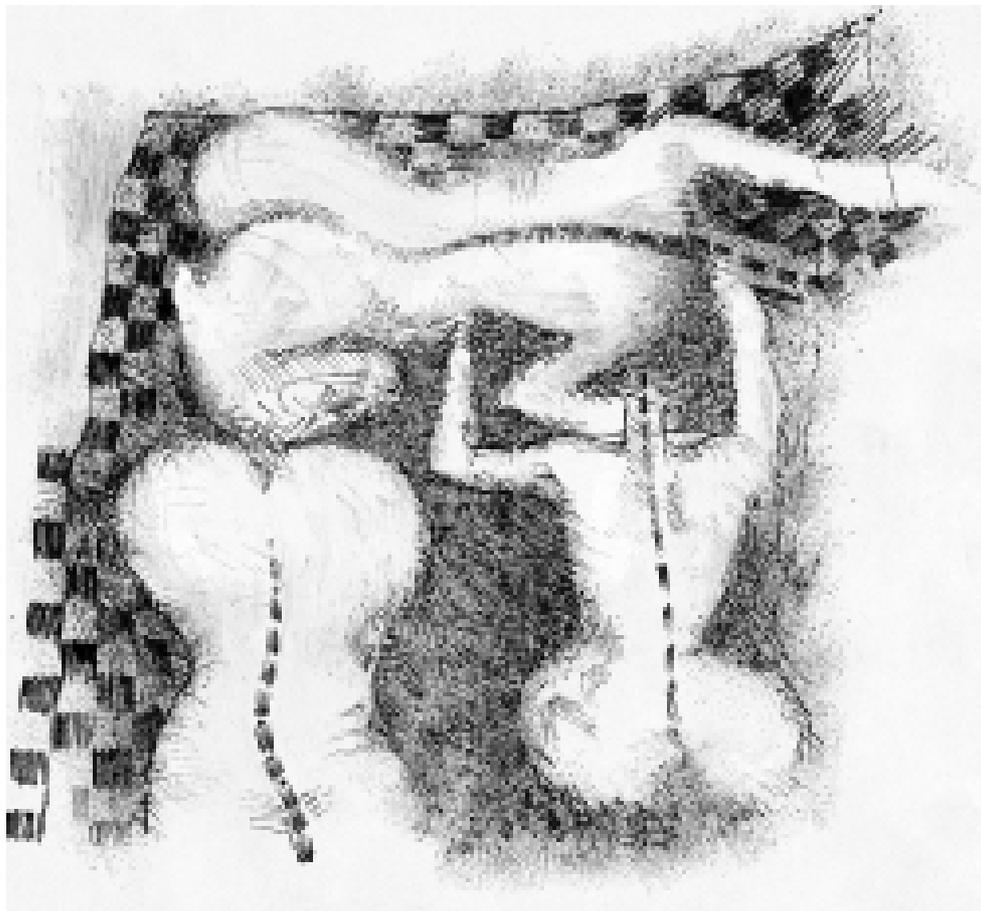
EDITORIAL

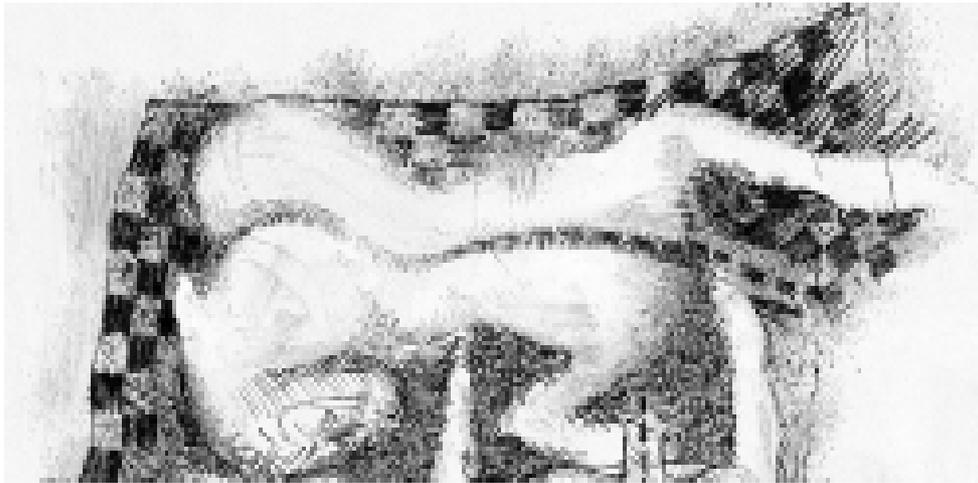
El tercer milenio y las políticas de población

La cercanía del año 2000 en que se inicia el tercer milenio, constituye un buen pretexto para insistir en problemas demográficos que afectan al conjunto de la sociedad, dado el panorama sombrío de la globalización y de nuestro desarrollo económico. Una perspectiva de la dinámica de la población, o la consideración de un mediano plazo, hacia el año 2050, lo cual resulta cercano, frente a tres grandes problemas, permite plantear la necesidad de tomar decisiones desde ahora.

El primer problema tiene que ver con uno de los extremos de la desigualdad cuyo ámbito es rural e indígena. La

pobreza implica desnutrición, hambre y generaciones de población rural e indígena que son sacrificadas. El saldo en el crecimiento rural de localidades de menos de 10 mil habitantes de 1990 a 1995 de 0.88% y de localidades de menos de 2 500 habitantes de 0.65%, nos hablan de un flujo migratorio considerable ya que el crecimiento nacional fue de 2.04% (estimado al inicio del periodo). También, por primera vez las localidades de 10 mil a 15 mil habitantes muestran un crecimiento demográfico menor al nacional de 1.95%. En conjunto este flujo de población excedente, ya que no encuentra ocu-





pación, se va a los centros mayores y a los Estados Unidos en donde residen 7.5 millones de personas nacidas en México para 1995. Si consideramos el carácter de nuestro desarrollo y la crisis de la agricultura que se da desde 1965 cuando se inicia un saldo negativo en la balanza comercial del sector, este flujo por lo menos se mantendrá y seguirá formando parte de la desigualdad urbana, dada la inexistencia de proyectos productivos y empleo en el ámbito rural. El flujo rural-urbano continuará su trayectoria migratoria iniciada desde principios de siglo.

Un segundo gran problema resulta el muy lento crecimiento de la producción y una crisis de larga duración. El PIB desde 1980 sólo ha crecido en promedio anual 2% con fluctuaciones y fases recesivas. El empleo es precario, con un 60% de la población con menos de dos salarios mínimos o sin ingresos, además de que el 60% no cuenta con prestaciones sociales.

Se dispone de proyecciones demográficas de la población en edades activas, lo que da una idea del esfuerzo necesario para dotar cada año de empleo medianamente remunerado por lo menos a un millón de mujeres y hombres que arriban a edades activas. Puede afirmarse que el sistema económico está incapacitado para la creación del empleo necesario. Por otra parte, son los hogares los que han paliado la crisis al ampliar el número de miembros que incorporan ingreso, lo que implica el abandono de la escuela a edades tempranas. Estamos frente a situaciones de sacrificio generacional. Anualmente se agrega un millón de pobres en el presente sexenio. Estas son situaciones sociales básicas que se desprecian desde el poder y sólo son tratadas a través de programas asistenciales y de caridad, sin

enfrentar las causas estructurales de la miseria.

Un tercer gran problema que aparece en razón directa del proceso de envejecimiento demográfico es el de la proporción de población mayor, que para 1998 fue de 7 millones con edades de 60 años y más, o sea 6.9%. La proyección del CONAPO para el año 2050 estima 41.5 millones, es decir el 31.3%, de ahí que crecerá en términos relativos 4.5 veces y seis veces en su monto. Por cada dos mayores de 59 años habrá solamente tres en edades activas, de los cuales laborará máximo el 40%, de ahí que dependerá de cada activo por lo menos un mayor, siempre y cuando continúe laborando el 35% entre hombres y mujeres que actualmente lo hacen de más de 59 años. Ello implica la necesidad de, cuando menos, el 60% del salario en el sistema anterior de solidaridad generacional para el retiro. En el sistema actual habrá que preguntarse por las proporciones posibles de lograr ocupación remunerada por arriba de dos salarios mínimos, que es el lugar de donde salen las transferencias que ahora recibe el 56% de manera tremendamente restringida. Estamos frente a la posibilidad cercana de muchos millones de ancianos miserables. Esta perspectiva constituye un resultado esencial que debe ser discutido bajo el principio de ética pública en donde el carácter del Estado debe orientarse al bienestar de las grandes mayorías contemplando la globalidad que escapa al poder político y ejerce funciones carentes de legitimidad democrática, preservando a la Nación.

En términos de la política económica puede decirse que el panorama es de desastre, y en cuanto a la política de población, que ha cumplido en alto grado la

orientación hacia la disminución del crecimiento demográfico, debe replantear sus consecuencias y su integración real a los planes y programas de desarrollo. El nivel de reemplazo demográfico se dará en el año 2005 para llegar con 1.7 hijos por mujer en edad reproductiva para el año 2030. En razón de las consideraciones que originaron la política de población actual estamos frente a un total fracaso, dado que el bienestar ha retrocedido. Se puede argumentar que este es un problema de globalización que afecta a todos los países y que hay que aceptarlo.

Frente a tales planteamientos debemos hacernos preguntas elementales. ¿Tenemos que aceptar la brutal concentración del ingreso y el poder actual?; ¿debemos aceptar la expropiación de todo tipo de riqueza que producimos?; ¿hay que aceptar la apropiación del mundo? Y es aquí cuando la privatización de todo, como dogma neoliberal es insostenible y el requerimiento de democracia y pluralidad se hace necesario. La Nación por lo pronto está agraviada.

De cualquier manera debemos contemplar el futuro también como herencia a las siguientes generaciones. El panorama es sombrío y obliga al cuestionamiento, que tiene que ser amplio y democrático, del sistema económico que se defiende hoy precisamente frente al empobrecimiento y pauperización de las grandes mayorías.

Implica la consideración de un Estado plural, en todos sus sentidos y tratar la globalidad en términos de los pueblos y las etnias, o sea el de la diversidad en el marco de la Nación, con respeto por el otro, en un Estado en donde el poder no se forje en la exclusión y en donde la autonomía indígena conlleve la participación democrática de todos.

En materia de población esto implica la gran discusión de los escenarios futuros y de los tamaños y estructuras familiares. ESTAMOS EN EL LÍMITE DEL TIEMPO para tomar decisiones respecto al panorama de la pobreza generalizada, con más de 30 millones de población anciana y miserable y un reemplazo generacional que se pierde cada vez más. No existe fundamento expreso alguno para aceptar como más conveniente a una estructura de población estacionaria o con crecimiento cero, y más aún con crecimiento negativo. Tenemos muy poco tiempo para prevenir este futuro desastroso. **Demos**